

**VII ENCUENTRO DE LATINOAMERICANISTAS ESPAÑOLES**  
**Madrid, 13 a 15 de noviembre de 2001**

*Ciudad, Democracia y Movimientos Sociales: el Movimiento de  
Ocupantes e Inquilinos (MOI) de Buenos Aires*

*MESA: Sociedad Civil, Estado y Mercado en América Latina:  
gobernabilidad y participación democrática.*

**Fernando Díaz Orueta, María Luisa Lourés y Juan Manuel Agulles**  
**(Departamento de Sociología II, Universidad de Alicante)**

## 1. LA CUESTIÓN POLÍTICA DEL AJUSTE Y LA REFORMA DEL ESTADO<sup>1</sup>.

En América Latina, y en particular en Argentina, la aplicación de las políticas de ajuste económico en la década de los ochenta y, todavía con una mayor intensidad en los años noventa, favoreció la profundización de procesos de exclusión social que han afectado muy duramente a los sectores medios y populares.

Como sostiene Calcagno (1999:2), el término ajuste se ha venido utilizando con una intencionalidad eminentemente política. La *inevitabilidad* del ajuste ha servido como coartada para justificar actuaciones que han conllevado enormes costes sociales (aumento del desempleo y de la precariedad laboral, descenso de los salarios reales, deterioro en la prestación de servicios básicos como la educación y la salud, etc.). La “receta” del ajuste, diseñada en las mesas de los organismos internacionales de regulación económica en perfecta sintonía con los intereses de los países centrales, se ha ido aplicando, de una u otra forma, por la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos, bajo la justificación de la búsqueda de una supuesta liberalización económica.

Para Calcagno (1999), el ajuste durante el periodo de la deuda se entendía como una cuestión política coyuntural, con el objetivo de afrontar los pagos de los intereses. Sin embargo, desde finales de los ochenta y, más claramente, a principios de los noventa, la cuestión política del ajuste se convierte en el “ajuste estructural”. Esta nueva vuelta de tuerca del neoliberalismo supuso una profundización en las condiciones de liberalización de los mercados y de los flujos de capital con el exterior, además de la desregulación del mercado de trabajo y del mercado financiero. Con ello, se pretendía conseguir la adaptación al nuevo modelo de desarrollo hacía el que la región debería avanzar en esta nueva etapa expansiva del capital internacional.

En Argentina, como en casi todo el mundo, el comportamiento de los mercados financieros se convierte en una forma de chantaje a las instituciones democráticas, que toman sus decisiones políticas basándose en los índices de “riesgo país”. Los capitales inversores se verán “atraídos” o “espantados” en función de las fluctuaciones de este indicador. Este poder de los mercados financieros puede, incluso, permitir la especulación sobre la quiebra del

sistema económico de un país, tal y como se pudo comprobar en los últimos episodios de crisis en Argentina<sup>2</sup>.

En Argentina, la aplicación de estas políticas se profundizó a partir de los años noventa, resultando muy destacable la aceleración del proceso de privatizaciones. Esta tendencia irá acompañada de un recorte de las políticas sociales, favoreciendo, en consecuencia, un crecimiento de la vulnerabilidad de los sectores medios y el empobrecimiento de los sectores populares. Durante la década, el aumento del subempleo y del desempleo abierto fue muy acusado.

La confluencia de esta serie de factores terminó produciendo un evidente efecto de movilidad social descendente para amplias capas de población. Las causas de la misma no deben buscarse tanto en los vaivenes económicos de la nueva economía *globalizada*, como en los desastrosos efectos de las políticas de ajuste. Numerosos hogares de clase media vienen sufriendo un empobrecimiento constante (Minujin y otros, 1995).

En los años noventa el gobierno penronista de Carlos Menem reforzó, todavía más, el papel del Estado como garante de los intereses de los sectores económicos y sociales que apostaban por la aplicación a rajatabla del modelo neoliberal. Con el lastre de la deuda externa y la política de privatizaciones adoptada, las posibilidades del Estado de afrontar los costes sociales del proceso resultaban muy escasas. Además, el nuevo orden desaconsejaba este tipo de actuaciones: era el tiempo de las políticas focalizadas de lucha contra la pobreza (Díaz Orueta, González Villar, Lourés y Sintés, 2000: 9-32).

En definitiva, la reforma del Estado ha supuesto mucho más que una remodelación del sector público o una reforma administrativa. Como afirma Vilas (1997:147): “La reforma del Estado puede ser vista como parte del intento de poner fin a la crisis por las facciones más globalizadas del capitalismo norteamericano”.

Además de la privatización como proceso central de la reforma del Estado, en los años noventa se asistió a la proclama del discurso de la descentralización como medio para respaldar a las comunidades locales en su proyecto de integración en la economía global<sup>3</sup>. Una determinada lectura de la descentralización serviría de justificación para explicar la

reestructuración del Estado, desviando al poder local la asunción de nuevas responsabilidades sin que, a la vez, se produzca la suficiente dotación presupuestaria.

### **La fragmentación creciente de la estructura social.**

La ruptura de la cohesión social es cada vez más evidente. La brecha abierta entre aquellos sectores sociales que acceden a los beneficios de esta etapa de reestructuración (apenas el decil con mayores rentas), los sectores que empiezan a ser vulnerables a los procesos de exclusión social y los sectores excluidos, se ensancha sin cesar<sup>4</sup>.

La destrucción y la precarización del empleo se han convertido en uno de los motores principales de los procesos de exclusión social. La reestructuración del modelo productivo, la desregulación del mercado de trabajo y los nuevos avances tecnológicos se han traducido en una nueva división del trabajo, así como en una “desclasificación” de la fuerza de trabajo a nivel local. Siguiendo a Vilas (1997:147): “Se genera así un efecto de redundancia laboral que contribuye a la exclusión social de un número grande de trabajadores y familias”.

En Argentina la destrucción de empleos en los sectores de la industria y de la construcción ha generado un aumento del desempleo urbano. A la vez, han aparecido nuevas formas de precariedad laboral ligadas, en muchas ocasiones, a la economía informal. El “cuentapropismo” y otras formas no reguladas de empleo han cobrado nuevos bríos (Coraggio, 1998).

La fragmentación y la desintegración social son el caldo de cultivo de un individualismo que debe ser afrontado por los movimientos sociales y los partidos de izquierda, complicando enormemente los intentos de articulación social (Díaz Orueta y Lourés, 1995).

## **2. CIUDAD, VIVIENDA, RENOVACIÓN URBANA Y PARTICIPACIÓN.**

La crisis social descrita presenta también una clara dimensión urbana. Las grandes metrópolis, y Buenos Aires con doce millones de habitantes lo es, se ven sacudidas de una forma especial por las contradicciones generadas por el despliegue del nuevo modelo (Díaz Orueta, 1997). Los sectores más beneficiados por el modelo y aquellos que se encuentran

sumidos en los procesos de exclusión descritos, comparten un espacio urbano cada vez más fragmentado.

Para el periodo comprendido entre 1980 y 1991, fecha de realización del último Censo de Población<sup>5</sup>, Torres (1997) analizó los cambios en la estructura socioespacial de la ciudad metropolitana de Buenos Aires, constatando un empeoramiento de la situación socio-habitacional en las zonas centrales de la ciudad y una diferencia básica respecto a los procesos que se dan en algunas ciudades europeas: en Buenos Aires la suburbanización no se llevó a cabo por las clases medias y altas, sino que fueron los sectores trabajadores los que a través de los “loteos”, y aprovechando la red de transporte público que funcionaba relativamente bien, desarrollaron mayoritariamente la segunda corona metropolitana. Por tanto, igual en el centro que en los suburbios, se da una heterogeneidad cada vez mayor.

En este periodo, y siempre siguiendo a Torres, los rasgos centrales que se observan son los siguientes:

- a) Aumento de los asentamientos urbanos: formaciones de vivienda precarias que ocupan los intersticios de la trama urbana para ubicarse en un espacio central. En el centro los recursos urbanos son más accesibles y el costo por el transporte menor. Los transportes públicos nacionalizados en anteriores etapas serán privatizados en la década de los noventa, aumentando el coste del desplazamiento para los trabajadores, a la vez que se reducían las oportunidades de trabajo en el área central.
- b) Suburbanización de las clases de más renta en los “country clubs”, en zonas alejadas del centro urbano, más allá las villas miseria que se mantienen en la segunda corona metropolitana, muchas de ellas restos del proceso de “erradicación de villas” llevado a cabo por la dictadura militar en las zonas cercanas al centro.
- c) Deterioro del centro y microcentro, a la vez que aparecen los “nuevos centros” de las clases medias-altas que no siguen la pauta suburbanizadora. Se mantienen las situaciones habitacionales precarias como los conventillos y aumentan los inquilinos de cuartos en hoteles-pensión. A partir de la segunda mitad de los ochenta y durante los noventa, cobraron un protagonismo especial las ocupaciones de edificios en el centro de Buenos Aires.

Como en otras ciudades latinoamericanas (Portes, 1988), también en Buenos Aires el aumento de la “distancia social” entre clases sociales se ha visto acompañado por una mayor “cercanía geográfica” en las pautas residenciales y, en definitiva, en la pugna por la centralidad y los recursos urbanos. Pero el “roce” aparente entre los distintos sectores sociales no debe llevar a engaño: nos encontramos frente a un espacio roto. La posibilidad del derecho a la vivienda, a los servicios y equipamientos del área central, y, en último término, el derecho a la ciudad, se convierte así en uno de los problemas urbanos más importantes en Buenos Aires.

### **El acceso a la vivienda y los procesos de recualificación urbana en el centro de Buenos Aires.**

El continuo juego de conflictos existente alrededor del desarrollo de la ciudad, se manifiesta, con especial claridad, en la formulación de las políticas de recualificación del centro urbano. Estas actuaciones encuentran una respuesta desde distintas expresiones del tejido social que actúan a nivel barrial en su lucha por el acceso a la vivienda.

Siguiendo el trabajo de Lourés (1997) sobre la situación habitacional en el barrio de San Telmo (centro histórico de Buenos Aires), se detecta un deterioro en las condiciones de acceso a la vivienda en el periodo 1980-1991. Los datos para Capital Federal muestran un aumento de las distintas modalidades de precariedad habitacional extrema, en las que habitaría un 10% del total de la población de la ciudad. A finales de los ochenta aumentó también de forma notoria la ocupación de edificios vacíos, generalmente de propiedad municipal.

A este aumento de situaciones “irregulares” en el acceso a la vivienda, se añade la pérdida del carácter residencial de la zona central, sometida a grandes presiones por parte de las actividades terciarias. En el periodo intercensal 1980-1991, se calcula en unas 1000 la pérdida de viviendas producida en el área estudiada por Lourés (1997).

La recualificación urbana del centro se está acometiendo atendiendo, esencialmente, al interés que este espacio presenta para los sectores sociales de mayor renta, en general muy bien insertos en el proceso de globalización, y para los capitales extranjeros, generando dinámicas de segregación urbana y expulsión muy acusadas.

De esta forma, especialmente desde principios de los noventa, el centro de Buenos Aires, y en particular el área de San Telmo, está siendo objeto de una pugna entre diversos intereses que mantienen al menos dos lógicas diferentes respecto a cómo se debería producir la recualificación del área.

Por un lado, aparecería un proyecto de ciudad, defendido desde la administración y muy ligado a las tendencias generales que aparecen en otras grandes metrópolis, con continuas referencias a la necesidad de crear grandes infraestructuras orientadas al ocio, el consumo y al turismo, nuevos espacios para la actividad terciaria avanzada y localizaciones residenciales destinadas a las clases sociales más solventes. Esa es, por ejemplo, la lógica a la que responde la operación de Puerto Madero, llevada a cabo en los años noventa, donde a partir de la rehabilitación de una serie de galpones y de las viejas infraestructuras ligadas a esa zona del puerto, se defendía la sustitución de usos que se consideraban marginales por otros que respondían a la lógica esbozada más arriba. Esta operación genera tensiones enormes sobre zonas residenciales adyacentes como el barrio de San Telmo, sobre el que vuelve a pender la amenaza de un posible proceso de “gentrification”.

A la vez, y en la mayor parte de las ocasiones complementando el sentido de fondo de las grandes operaciones citadas con anterioridad, se apela al desarrollo de “lo local” para atraer recursos económicos ligados a las actividades de ocio y turismo. Ya tienen una larga trayectoria en Buenos Aires, por ejemplo, las ferias de artesanía y antigüedades, ubicadas tanto en el centro como en distintas áreas del conurbano. Estas ferias se han ido sumando progresivamente al circuito turístico de la ciudad hasta convertirse en uno de los atractivos más visitados (por ejemplo, la feria de antigüedades de San Telmo). En este último barrio, el conflicto entre los intereses de las asociaciones de comerciantes interesados en la potenciación de esta actividad y las organizaciones populares que defienden el mantenimiento del barrio como un espacio donde continúen encontrando su lugar los sectores populares, se plantea con mucha claridad. Aquí la localización habitacional de “los otros marginales” se encuentra muy cercana al lugar donde se ubica la actividad comercial, siendo visualizados como un peligro para su normal desarrollo.

Contrastando fuertemente con el proyecto de ciudad hasta aquí esbozado, se plantearía la perspectiva de un desarrollo urbano construido a partir de la participación de los sectores populares en la resolución de sus problemas habitacionales y en la batalla contra la exclusión

social. Son diversos los movimientos sociales y otros grupos con un grado menor de organización que intentan articular una respuesta a los procesos de segregación urbana. Aunque con una posibilidad real de intervención muy restringida, hoy por hoy, son un actor más a valorar, a la hora de plantear la investigación de los procesos de recualificación urbana en Buenos Aires. Desde estos grupos hay una fuerte crítica a la creciente especulación inmobiliaria y a la privatización de los espacios públicos. Organizaciones como la Mutual de Desalojados del barrio de La Boca o el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI), pueden ser ubicadas nítidamente en ese tipo de planteamientos.

### **3. EL MOVIMIENTO DE OCUPANTES E INQUILINOS (MOI). EXPERIENCIAS DE CONSTRUCCIÓN COLECTIVA Y PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA.**

#### **El MOI: de la explotación en el hábitat a la práctica democrática.**

El MOI agrupa a distintos sectores sociales con un denominador común: los problemas de acceso a la vivienda y la lucha por el derecho a la ciudad y a los recursos localizados en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Surge a partir de una primera experiencia de autogestión del hábitat en una de las ocupaciones que se convirtió en hito de la pugna urbana en la ciudad. El proceso de ocupación y posterior articulación vecinal en el ex – PADELAI (antiguo edificio del Patronato de la Infancia ubicado en el barrio de San Telmo), marca, a finales de los años ochenta, la consolidación de una práctica de articulación de los sectores ocupantes del centro de Buenos Aires a la búsqueda de la regularización y la mejora de las condiciones habitacionales. La precariedad residencial para nada resulta ajena a la puesta en práctica de las políticas de ajuste y a la actuación de la dictadura militar argentina, que convirtió las expulsiones y las “erradicaciones” de los sectores populares de las zonas centrales, en ejes básicos de su *política habitacional*. Con el comienzo del nuevo periodo democrático, se inició el regreso de los sectores populares a las zonas centrales, facilitándose además las condiciones de apertura política que permitieron la acción de movimientos sociales de nuevo tipo. La apertura política se produjo a la vez que el ajuste económico, implementado tanto durante la etapa de gobierno radical de Alfonsín, como, ya más tarde, en la etapa menemista, conllevando las graves consecuencias sociales ya apuntadas.



Respecto al proyecto de recualificación urbana para el centro de Buenos Aires, surge la tensión entre los intereses inmobiliarios y la presión de la actividad terciaria y los sectores populares. A principios de los noventa, con el impulso dado a la operación Puerto Madero y a otras intervenciones sobre el área, comienza una etapa de creciente criminalización de los ocupantes de edificios, con los consecuentes desalojos y persecuciones policiales. Con esta pugna como contexto, es cuando la acción de ciertas redes sociales de base y de movimientos sociales como el MOI va a alcanzar mayor protagonismo. Desde estas posiciones se va a plantear una significativa resistencia a las expulsiones, reivindicando el derecho a la ciudad, cuestionando los procesos de desregulación y privatización, tan negativos para el espacio urbano.

Si bien uno de los objetivos hacia los que apuntan estos movimientos es la actuación en la escala microsocial y la reivindicación inmediata de medidas de emergencia para solventar las situaciones de exclusión social más extrema, el MOI presenta algunas características distintivas. A continuación se procede al análisis de la dinámica de este movimiento, destacando su reivindicación de la práctica política ligada a la participación directa de los vecinos.

### **Cooperativismo ligado al hábitat.**

Inicialmente, el MOI surge a partir de la constitución de cooperativas vecinales para obtener la regularización dominial de los edificios que ocupan familias a las que les resulta imposible acceder al mercado regulado de la vivienda. En su mayoría estos edificios son de titularidad pública, mostrando un grado de abandono elevado. A mediados de los noventa la cooperativa del PADELAI llegó a pactar con el municipio la autogestión del edificio en un 70%. A partir de esta experiencia cooperativista, el MOI se consolida, tomando como una de sus principales referencias la experiencia cooperativista de construcción de vivienda popular en Montevideo (Uruguay).

En gran parte de Latinoamérica el movimiento por la vivienda y un hábitat digno para las clases más desfavorecidas muestra un auge importante. La autoconstrucción y las experiencias de construcción colectiva mediante cooperativas, son dos de las formas en las que se expresa la articulación de las clases populares en su lucha por el derecho a la ciudad. Es preciso analizar hasta qué punto estas experiencias colectivas fomentan la participación

democrática a partir de la reivindicación del hábitat. Todavía hoy, una parte importante de las movilizaciones sociales se queda en las reivindicaciones puntuales, sin poner en entredicho el actual modelo de desarrollo económico y, por tanto, al proceso de globalización en la forma en que se está desarrollando.

### **La articulación política del MOI**

A la reivindicación del derecho a la ciudad mediante el freno a las expulsiones masivas, se une en el MOI una inserción más amplia en los movimientos y organizaciones sociales de ámbito local, nacional e incluso internacional. Esta articulación implica una diferenciación importante respecto a otros movimientos sociales.

A partir de la reivindicación del derecho a la ciudad y de la denuncia de la “explotación urbana”, el MOI inserta su práctica en una actividad de capacitación política y participación de todos sus integrantes en dos niveles:

- a) Internamente. El MOI tiende a funcionar de manera horizontal, tomando las decisiones en asambleas en las que participan tanto representantes de todas las cooperativas como los propios cooperativistas, aunque tiene una comisión directiva elegida que se encarga de tareas administrativas como llevar las actas de las reuniones, los trámites legales y contables, etc. El MOI cuenta con diversos órganos internos y actividades en las que participan los cooperativistas: los talleres de autogestión del hábitat, el grupo de jóvenes, el área de comunicación donde se edita un boletín interno, los talleres de desarrollo local y territorio, los talleres de capacitación política, etc. Además, en el último año, se ha desarrollado el espacio de *La Guardia* en el que se recibe a la gente interesada en el proyecto y se van conformando nuevas cooperativas y proyectos de construcción colectiva del hábitat. A esto hay que añadir las horas de *ayuda mutua*, a las que todos los cooperativistas se comprometen, participando, por ejemplo, en las tareas de autoconstrucción de viviendas, preparación de movilizaciones, apoyo a otros movimientos, etc. En resumen, se puede decir que la práctica interna del MOI muestra un carácter horizontal y participativo, que se extiende más allá de la reivindicación de una vivienda digna y que abarca otros ámbitos, desde los estilos

de vida a la formación política y la constitución de actores colectivos impulsores de cambios estructurales.

- b) Externamente. El MOI se inserta, a nivel nacional, en la Federación de Tierra y Vivienda de la CTA (Central de Trabajadores Argentinos), un importante sindicato opositor argentino con gran presencia en las movilizaciones sociales desde la década de los noventa. Como ejemplo de la articulación entre la CTA y el MOI se puede mencionar el apoyo al paro de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas en el último conflicto con la SEPI: algunas personas del gremio aeronáutico de la CTA formaban parte, a la vez, de distintas cooperativas del MOI<sup>6</sup>. El MOI se inserta en la Secretaría Latinoamericana de la Vivienda Popular (SELVIP), de la que es miembro fundador. Este organismo, que reúne a varios países del subcontinente, celebra reuniones periódicas de intercambio de experiencias entre cooperativistas y otros movimientos de base que inciden en el problema del hábitat de las clases populares.

Respecto a su imbricación local, el MOI juega un papel importante dentro de la trama de organizaciones que actúa en la zona central de Buenos Aires, área en la que se ubican algunas de las cooperativas de ocupantes. La multiplicidad de intereses que coexisten en el centro y el carácter polémico de los proyectos de recualificación hacen que la negociación a escala local no esté exenta de contradicciones y desencuentros entre los distintos actores.

En una primera explotación de las entrevistas realizadas a lo largo del mes de junio de 2001 a diferentes líderes vecinales, se desvela la situación de fragmentación organizativa y el complejo posicionamiento de un movimiento como el MOI que, objetivamente, se encuentra, por ejemplo, en una clara confrontación con los comerciantes y anticuarios de San Telmo. En cuanto al gobierno local, el director del CGP1, que incluye la zona central de Buenos Aires, reconoce al MOI como una de las organizaciones de base con mayor capacidad de articulación social en proyectos con contenido participativo.

Una de las características más relevantes del MOI es su capacidad para proponer alternativas en un ámbito de tanta complejidad técnica como la edificación y la restauración de edificios. En muchas ocasiones, las organizaciones sociales de base consiguen alcanzar cierta capacidad de convocatoria social, pero dependen, en última instancia, de los proyectos

técnicos desarrollados por la administración o, incluso, por la iniciativa privada. En el MOI trabaja un importante grupo de profesionales, desde arquitectos y sociólogos hasta el trabajadores sociales<sup>7</sup>.

### **Coyuntura actual y participación.**

En la coyuntura actual es posible destacar una consolidación del MOI en cuanto a su articulación con otros movimientos y organizaciones de base, si bien, se puede advertir que la aceptación del movimiento en los barrios en los que actúa, continúa siendo problemática por el rechazo de los sectores más conservadores y por los intereses especulativos inmobiliarios que crecen cada vez más en los espacios centrales.

El Gobierno de la Ciudad facilita la actuación de los sectores sociales y económicos interesados en intervenir drásticamente en las áreas centrales. Al mismo tiempo, atiende parcialmente a los proyectos de participación mediante los CGP y la negociación con las organizaciones sociales. Sin embargo, estas políticas contradictorias más parecen responder a una “gestión del escenario de crisis” para contener los repentinos estallidos que se han sucedido en Buenos Aires y en algunas provincias con motivo de los nuevos ajustes y el deterioro creciente de la situación socioeconómica.

A pesar de su coordinación con otras organizaciones y su voluntad política de cambiar el contexto donde se produce la exclusión social y la explotación urbana, experiencias como el MOI encuentran muchas dificultades para superar desde el nivel local la fragmentación social que genera la crisis causada por el ajuste. De todos modos, la labor de capacitación política y la creación de una cultura solidaria y participativa, además de una visión sobre el hábitat entendido como producción social, apuntan a cambios de envergadura que no pueden ser ignorados desde la investigación social.

#### 4. BIBLIOGRAFÍA

- CALCAGNO, A.F., (1999): “Ajuste estructural, costo social y modalidades de desarrollo en América Latina.”, en: Seminario: **O ajuste estrutural na América Latina: Custos sociais e alternativas**, CLACSO, Porto Alegre (Brasil), 1-3 de diciembre.
- CASTELLS, M. (1981), **Crisis urbana y cambio social**, Madrid: Siglo XXI
- CORAGGIO, J.L (1998), **Economía urbana. La perspectiva popular**, Quito:
- DÍAZ ORUETA, F. (1997), “La ciudad en América Latina: entre la globalización y la crisis”, **América Latina Hoy**, nº15, pp.5-12.
- DÍAZ ORUETA, F y LOURÉS, M.L. (1995), “El incierto devenir de los movimientos sociales urbanos”, **Cuadernos de África y América Latina**, nº18, pp.39-50.
- DÍAZ ORUETA, F; GONZÁLEZ VILLAR, C; LOURÉS, M.L. y SINTES, L (2000), **Desarrollo urbano y pobreza. La ciudad de Posadas, Argentina**, Alicante: Universidad de Alicante.
- LOURÉS, M.L. (1997), **Buenos Aires: centro histórico y crisis social**, Alicante: ECU.
- MINUJIN, A. y otros (1995), **Cuesta Abajo. Los nuevos pobres: efectos de la crisis en la sociedad argentina**, Buenos Aires: UNICEF-Losada.
- PORTES, A. (1988), “La urbanización en América Latina en los años de crisis”, en: LOMBARDI, M y VEIGA, D (eds.), **Las ciudades en conflicto. Una perspectiva latinoamericana**, Montevideo: CIESU, pp.81-134.
- RODRÍGUEZ, M.C. (1997), “Organizaciones de ocupantes de edificios en Capital Federal: la trama poco visible de una ciudad negada”, en: HERZER, H (comp.), **Postales urbanas del final del milenio. Una construcción de muchos**, Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires.
- RODRÍGUEZ, M.C. y PREOCUPEZ, V. (1998), **Autogestión, rehabilitación y concertación. Experiencias en políticas de vivienda popular**, Buenos Aires: MOI.
- TORRES, H. (1996): “Buenos Aires en su contexto metropolitano”, en: HERZER, H. (comp.), **Ciudad de Buenos Aires. Gobierno y descentralización**. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, pp.109-128.
- VILAS, C. (1997): “La reforma del Estado como cuestión política”, **Política y Cultura**, nº8, pp.147-185.

## NOTAS

---

<sup>1</sup> Esta ponencia recoge los primeros resultados de la investigación “Exclusión social y renovación urbana: nuevas estrategias de desarrollo local. Buenos Aires (Argentina)”, financiada por el Programa de Cooperación Científica con Iberoamérica del Ministerio de Educación y Cultura y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). La investigación se realiza de manera conjunta entre un equipo español de la Universidad de Alicante, dirigido por Fernando Díaz Orueta, y un equipo argentino del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, dirigido por María Carla Rodríguez.

<sup>2</sup> En los días de julio siguientes a los nuevos ajustes del gobierno y a la Ley de Déficit Cero, tanto el Ministro de Economía como el Presidente de la Nación, denunciaban en prensa el comportamiento de los mercados financieros y las operaciones especulativas de grupos inversionistas que “apostaban” a la quiebra de la convertibilidad y propiciaban así la fuga de los activos de Argentina.

<sup>3</sup> En Argentina, uno de los resultados del proceso descentralizador iniciado en los noventa fue la aprobación de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (1996). En ella se prevé la creación de comunas que funcionarán de forma descentralizada. Los actuales CGP (Centros de Gestión y Participación) son el paso previo a la constitución de las comunas.

<sup>4</sup> Distintos autores sostienen que durante el periodo del ajuste, en los años ochenta y noventa, el número de “pobres estructurales” permaneció prácticamente constante en Argentina, aumentando, sin embargo, las familias que, por primera vez, conocieron situaciones de pobreza. (Minujin y otros, 1995).

<sup>5</sup> Para finales de 2001 está prevista la realización del próximo Censo de Población. Sus datos resultarán de una especial trascendencia para comprender en profundidad los efectos que las transformaciones del modelo de acumulación han producido sobre Buenos Aires.

<sup>6</sup> La vocación “política” del movimiento es clara. Así lo demuestra el apoyo a estas y otras movilizaciones, como los cortes de ruta en el partido de La Matanza o, más recientemente, la participación en las movilizaciones generales contra el nuevo ajuste requerido por el FMI para conceder un préstamo más al gobierno argentino.

<sup>7</sup> Por ejemplo, uno de los principales impulsores del MOI es arquitecto. Ya en la experiencia cooperativista del ex – PADELAI articuló el trabajo de los alumnos de la carrera de Arquitectura con las necesidades de los cooperativistas.